pues la ley positiva estará siempre en función del contenido cultural de la llamada ley viva, cuya ley viva, a su vez, reflejará el mundo ético de una cultura determinada. De este modo, la sociología jurisdiccional exige un estudio de los esquemas culturales, y dentro de estos esquemas culturales de los criterios vigentes para medir el bien y el mal. Por medio de este método, a la base de toda determinación jurídica existe un concreto estudio cultural y sociológico.

En esta dirección pueden situarse sociólogos que están en el campo de la antropología y, en términos generales, una gran parte de los antropólogos.

En cuanto a la jurisprudencia fundamentada en el derecho natural, su desarrollo en estos últimos tiempos en América es muy grande, en tal medida que cualquiera que sea la dirección que partiendo de este supuesto tomemos, encontramos numerosos autores. Desde luego, no hay una sola concepción del derecho natural, pero sí hay un fundamento común según el cual el comportamiento de los seres humanos es expresión de su naturaleza esencial, y esta naturaleza esencial expresa un derecho natural que tiene los caracteres de la homogeneidad y la generalidad dentro del mismo nivel de desarrollo espiritual. Por consiguiente, aun dentro de una valoración objetiva y general, se da un cierto relativismo. Y el hecho de que la propia ley natural se escape de este relativismo, es de muy bastante significativa.—E. T. G.


Las derogaciones que respecto a las reglas clásicas constituyen los estatutos de las empresas nacionalizadas, tienen un alcance muy extendido respecto a la concepción de todo el Derecho administrativo. Ello será más notorio cuando no esté reciente en el recuerdo la circunstancia en que las nacionalizaciones han sido realizadas, y el único hecho constante sea el de que las empresas nacionalizadas formen una vasta categoría dentro de las públicas.

La nacionalización acarrea unas perspectivas que, si en parte le son propias, en parte manifiestan evoluciones anteriormente latentes, que van llegando ahora a adquirir conciencia propia.

La originalidad más marcada en el régimen de las empresas nacionalizadas es el compartir instituciones y reglas tomadas juntamente del Derecho privado y del público. Su enmarcación preferentemente pública o privada no puede hacerse desde un estudio comparativo de las fuentes de su constitución, sino desde el hecho de sus matrices funcionales respecto a las necesidades que pretende remediar.

La nacionalización de empresas rompe, pues, una de las categorías fundamentales del Derecho administrativo: la pertenencia al Derecho público. Las denominaciones técnicas usuales ya no sirven en todos los casos.

Pocas veces se ha definido por ley la naturaleza de algún establecimiento nacionalizado. Suelen describirse meramente, sin más. La causa se debe a que las nacionalizaciones han roto la autoridad de algunas ideas recibidas, y han planteado, desde luego, la necesidad de elementos más sólidos para una más amplia envergadura.

Otras veces las formas tradicionales subsisten, pero aplicadas a supuestos nuevos. Por tanto, no conservan su anterior sentido, y, a pesar de su aparente continuidad, lo modifican mucho.

La noción de servicio público es la que en primer lugar ha hecho saltar su coherencia antigua. Las soluciones aportadas a la calificación jurídica de las empresas nacionalizadas son muy numerosas, pero ninguna resuelve la nueva incertidumbre sobre la calificación de servicio público de las mismas. Y las cuestiones resueltas por la noción clásica de servicio público: competencia judicial, y régimen general de normas, multiplican los problemas prácticos de aquella imprescisión. Se resuelve cada aspecto: financiación, autoridad del Estado, control, igualdad para los beneficiarios, etc., independientemente del anterior concepto de continuidad teórica que brotaba del concepto de servicio público.

Otra noción afectada es la de establecimiento público, que antes se definía como la personalización de un servicio público. Ahora ya no es válida, en consecuencia de la crisis del concepto de servicio público.

El régimen de las concesiones administrativas permanece seguro. No importa la personalidad concreta del cesa-
rio, y el concedente sigue siendo la Ad-
ministración.

Pero en cuanto a la calificación de los
intereses comprendidos en las empresas
nacionalizadas, ¿es factible la de dere-
cho público y privado? Surge también
una nueva doble incertidumbre, respect-
to al entendimiento de lo que sea el capi-
tal de las empresas nacionalizadas: ¿El valor
que figura en balance? ¿El total de los medios de producción?

Por otra parte, ¿se ha querido hacer
propietario al Estado? Los organismos
sindicales alientan —y no hay que ol-
vidar que ellos son quienes han inspira-
rado y apoyado la nacionalización— du-
das muy poderosas.

En resumen. Los viejos conceptos ad-
ministrativos están en derrumbo. La cues-
tión de la competencia jurisdiccional,
que era su eje, falla en todos los
puntos. Falla el concepto de servicio
público, y la incertidumbre se aposen-
ta en todos los recintos. Pero los mis-
mos elementos que hacen tambalear el edi-
ficio son ya pilares para levantar una
nueva construcción.

Las únicas zonas apacibles son aque-
llas que aún dejan entrever restos del
liberalismo político. Las instituciones
permanecen con algún sentido: los
principios de legalidad y de igualdad se
conservan en esos sectores. Pero en
las zonas soliviantadas por las realiza-
ciones actuales los cambios engloban
todo el antiguo estatuto de las empre-
sas públicas. No obstante, ambas zo-
nas se delimitan en movimiento. No
hay frente continuo, sino que las fuer-
zas distintas operan más o menos en
cada sector. Resuelto, no puede
desensubirse la distinción neta de los
aspectos que ha de regular el procedi-
miento de derecho privado o el del púb-
lico. Queda siempre una certeza: la
transformación existente traerá consigo
esta evolución jurídica total.—A. Sán-
cchez de Acuéros.

Strauss (William): *The moral Right of
the Author*, en «The American Journal
of Comparative Law», Autumn, 1955,
vol. 4, number 4, pág. 506-538.

El autor divide su trabajo en teoría y
aplicación de la doctrina del derecho mo-
ral de autor en Europa y Estados Uni-
dos comparativamente en relación con
la Convención de Berna. Se examinan
tres cuestiones: ¿qué es el derecho mo-
ral, qué protección se dispensa a los
autores en los países que han adoptado
la doctrina y qué protección existe en
Estados Unidos. El artículo 6 bis de la
Convención de Berna reconoce que el
autor tendrá derecho durante su vida a
reclamar la paternidad de su trabajo y
a oponerse a toda violación de la in-
TEGRIDAD del mismo que pudiere ser perju-
dicial a su honor o reputación. Pero
el derecho moral de autor no se puede
decir que haya cristalizado todavía. El
derecho en cuestión es considerado usual-
mente como un derecho de propiedad
más que como un componente del dere-
cho llamado moral. La falta de uni-
dad en la solución de los problemas plante-
tados por el derecho de autor se revela
en que en el Derecho alemán el dere-
cho moral termina después de cincuenta
años después a partir de la muerte del
autor; en la jurisprudencia francesa el
derecho moral es independiente del co-
pyright, y en Gran Bretaña y Suiza con-
cluye con la muerte del autor. La con-
fusión doctrinal y la variedad de adhe-
siones al Convenio de Berna por los dife-
rentes países suscritos manifiestan que
la inalienabilidad del derecho moral,
basada en la imposibilidad de trasfe-
rirlo por venta o donación, no está ple-
namente aceptada. En los Estados Unidos
el autor tiene este derecho moral, pero
puede renunciarlo. Se siguen, en gene-
ral, las líneas europeas en esta materia,
pero no se encuentran, a juicio de Wil-
liam Strauss, suficientemente protegi-
dos.—E. S.

Van Vyve (Maurice): *La notion de sui-
cide* en «Revue philosophique de Lou-
vain», volumen 5, noviembre de 1954,
vol. 52, núm. 36, págs. 593-618.

El autor considera que existe gran
desacuerdo entre los diversos tratadis-
tas, en cuanto al concepto de la pal-
bra suicidio; por tanto, procede a una
revisión de las definiciones más autori-
zadas del vocablo, examinando qué no-
tas características del suicidio son las
más generales y admitidas. Señala en el
suicidio el acto externo y la voluntariec-
dad, y destaca las dos notas en que to-
do los autores están de acuerdo: es la
primera, que la víctima es, al mismo
tiempo, la causa, el autor de su propia
muerte; la segunda nota es la de que
el autor obra consciente y voluntaria-